
El Estado de derecho y la democracia, amenazados en toda la UE en el año de la pandemia de COVID-19

Madrid/Berlín/Bruselas – Martes, 9 de marzo de 2021

- El Estado de derecho ha empeorado en 2020 en comparación con 2019, en parte debido a la COVID-19 que exacerbó los problemas existentes.
- Los gobiernos con tendencias autoritarias de Hungría, Polonia y Eslovenia han utilizado la pandemia como excusa para debilitar aún más las normas democráticas.
- En algunos países con graves carencias democráticas, como República Checa, Eslovaquia y Rumanía, se están llevando a cabo reformas que podrían suponer una mejora de la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y las libertades de activistas y de plataformas ciudadanas.
- Las amenazas a la libertad de prensa y de expresión, los ataques a periodistas y activistas, la represión de la protesta y de la libertad de expresión, y las restricciones de acceso a la información pública son alarmantes en muchos países de la UE, incluidos algunos con una trayectoria democrática consolidada históricamente, como Francia, Alemania, Italia y España.

En concreto en España se ha identificado que en este año:

- *Se ha acentuado el entorno hostil ya existente para periodistas y medios de comunicación*
- *Ha aumentado de forma preocupante la obstaculización del derecho a la reunión y las detenciones arbitrarias de manifestantes. Así como las identificaciones por perfil étnico y la brutalidad policial, especialmente durante el confinamiento.*
- *La pandemia también ha acrecentado la brecha de desigualdad, afectando especialmente a las minorías y grupos vulnerables*
- *Ha continuado la muy preocupante tendencia de criminalización de la libertad de expresión (“demandas mordaza”) así como las denominadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, que buscan silenciar a la sociedad civil crítica con el poder.*

- *También ha sido un año en el que se han visto tendencias que ponen en entredicho la integridad del poder judicial y la transparencia de los nombramientos.*
 - *Dentro de la lucha desde las instituciones contra el discurso de odio y la desinformación, se han identificado igualmente medidas preocupantes al colisionar con el derecho a la libertad de expresión.*
-

La democracia y el Estado de derecho han retrocedido en un gran número de países europeos en 2020, según un nuevo y amplio informe en el que participan 14 organizaciones miembros de toda la UE del observatorio de derechos humanos Civil Liberties Union for Europe (Liberties), la mayor investigación de este tipo realizada por una red de ONG para 2020 hasta la fecha.

La libertad de prensa y las libertades de activistas y plataformas ciudadanas para expresar sus preocupaciones se han visto especialmente afectadas en muchos de los países analizados.

En toda la UE

La presión política sobre los medios de comunicación ha aumentado o se mantiene en niveles preocupantes en Polonia, Eslovenia, República Checa y Hungría. Algunos políticos y sus medios de comunicación afines atacan y acosan regularmente al periodismo crítico. Eslovenia es un ejemplo especialmente llamativo: se han generalizado las amenazas a periodistas y se trata de descalificar a mujeres periodistas tildándolas de “prostitutas”, provocando así la autocensura de muchos periodistas para protegerse de estos ataques. En Bulgaria, Italia, España, Eslovenia y Croacia el entorno cada vez es más hostil para los medios de comunicación. Aunque en España, Italia y República Checa se ha mejorado la protección de las personas que denuncian corrupción o irregularidades.

Las restricciones a la libertad de asociación han continuado, e incluso han empeorado, por ejemplo, en Bulgaria, Alemania, Hungría, Irlanda y Eslovenia. Únicamente en Rumanía se han producido algunos avances. La obstaculización del derecho a la reunión y las detenciones arbitrarias de manifestantes constituyen una tendencia cada vez más preocupante en muchos países, como Francia, Bulgaria, Croacia, Polonia, España y Eslovenia.

Asimismo, el acoso judicial también va en aumento. El activismo en Polonia y España ha sido objeto de un número creciente de denuncias, y en concreto, en España, de “demandas mordaza”, las denominadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Políticos y empresas presentan SLAPPs como arma legal para silenciar y acosar a las organizaciones de la sociedad civil y a

periodistas y que critiquen sus actividades. En los últimos años, periodistas, activistas y artistas también han sido objeto de este tipo de demandas en Croacia, Francia, Italia, Irlanda y Eslovenia.

La independencia del sistema judicial se ha debilitado aún más en países donde ya existían graves deficiencias, como Bulgaria y Polonia. Pero también han tenido lugar debates sobre la integridad del poder judicial y la transparencia de los nombramientos en Irlanda y en España. En muchos países sigue existiendo una sobrecarga de casos, que afecta la duración de los procedimientos y dificulta que los tribunales impartan justicia en un plazo razonable. Esto se debe a que no se dota al poder judicial de recursos suficientes. Bulgaria, Italia, Irlanda, Polonia, Rumanía y Eslovaquia son claros ejemplos.

La pandemia de la COVID-19 ha jugado un papel importante en el debilitamiento de la democracia en todo el continente. En un intento de detener la propagación del virus, se han elaborado leyes a menudo de forma demasiado rápida, restringiendo las libertades de las personas, incluido el derecho a la protesta pacífica. Estos procedimientos expres han supuesto una limitación de la supervisión del ejecutivo y restringido la posibilidad de que la sociedad civil se involucre en el proceso político. Prácticas que han tenido lugar también en países con una fuerte tradición de participación democrática, como Alemania, Irlanda o Suecia, aunque los peores cambios se han producido en países con problemas históricos con la democracia y el Estado de derecho, como Bulgaria y Rumanía, y en países gobernados por ejecutivos de tendencia autoritaria como Hungría, Polonia y Eslovenia. Los gobiernos de estos países han utilizado la pandemia como excusa para debilitar aún más las normas democráticas.

La justicia, la equidad y la independencia en países como República Checa, Rumanía y Eslovaquia podrían mejorar con una serie de reformas que ya están en marcha, o que se están debatiendo. La tendencia a la digitalización de la justicia es positiva y puede ayudar a mejorar la situación en países en los que el sistema judicial lleva mucho tiempo bajo presión, como Italia y España.

Otra nota positiva es que algunos países de la UE, como República Checa, están tratando activamente de limitar el **discurso de odio y la desinformación** mediante campañas. Sin embargo, algunos países han ido demasiado lejos, limitando la libertad de expresión legítima, como Bulgaria, Alemania, Hungría, Rumanía y España.

El informe también aborda **la corrupción, los controles y equilibrios** y las medidas adoptadas durante la **pandemia de COVID-19**.

Qué debe hacer la UE

La UE debe jugar un papel crucial en la protección del Estado de derecho y la democracia. La Comisión Europea ha dado un paso importante:

auditar anualmente el historial democrático de sus Estados miembros, ejercicio del que se nutre este informe. No obstante, Liberties insta a la Comisión a que amplíe el alcance de la auditoría, se asegure de que contiene recomendaciones claras para los distintos países, aplique sanciones a los países que están socavando el Estado de derecho y los lleve a los tribunales cuando sea necesario. Asimismo, debe garantizar que las organizaciones que trabajan por los derechos humanos y la democracia tengan suficiente financiación para llevar a cabo sus actividades.

[DESCARGAR INFORME GLOBAL](#)

[DESCARGAR INFORME ESPAÑA](#)

**Para ampliar información o solicitar entrevistas:
comunicacion@rightsinternationalspai.org**